

Perú, seis meses después: ¿Revolución desde arriba?

por **Carlos Núñez**

Los militares que el 3 de octubre último expulsaron del Palacio de Pizarro a un balbuceante y semidesnudo arquitecto llamado Fernando Belaúnde Terry han cumplido seis meses en el poder. No sólo han superado, de esta manera, los fatídicos «cien días» que (por lo menos desde la experiencia bonapartista epónima) marcan tradicionalmente el límite primario de la vida política de todo nuevo régimen, sino que incluso se han permitido hacerlo a contrapelo de Washington, respaldo recurrente y a menudo imprescindible de los esquemas golpistas latinoamericanos. El sostenimiento hasta hoy de ese enfrentamiento puede configurar de por sí una primera definición, ciertamente insólita —en sus extremos

más espectaculares y sin desconocer algunos antecedentes históricos— dentro del marco hemisférico; pero el sustento del gobierno militar, pese a su aparente galvanización, no ha dejado de ser fluido y resbaladizo, y si seis meses es un largo tiempo para los ajetreos periodísticos, continúa siendo una corta perspectiva para los análisis teóricos.

Aun en este terreno, sin embargo algo se ha podido avanzar desde el 4 de octubre de 1968, que la junta militar peruana bautizó «*Día de la Dignidad Nacional*» tras rescindir el contrato firmado por Belaúnde y la International Petroleum Company (IPC), e incluso desde el 9 de ese mismo mes, cuando se expropió a la filial de la Standard Oil of New Jer-

168 **sey la refinera de Talara. ¡Quizá resulte útil analizar con cierto orden tales avances:**

1) Las diversas líneas que hasta hoy coexisten pacíficamente en el seno del régimen militar peruano han sido relativamente visibles desde el momento en que se desató el proceso: «gorilas», «nacionalistas de derecha» (a los que igualmente podría llamarse *desarrollistas*) y *nacionalistas-populistas* (a falta de definición más precisa, carencia que tal vez corra por cuenta de su misma imprecisión ideológica, y ratificando mi personal desconfianza hacia la ambigüedad del término «*nasseristas*»), tienen dentro del esquema gubernamental castrense sus representantes descubiertos y sus encubiertos factores de poder. Parece empero algo arriesgado especular sobre su efectiva correlación de fuerzas internas, aunque en los escalones más altos del Ejecutivo hayan sido identificados más o menos públicamente representantes de las tres líneas; curiosamente, los observadores no han rastreado aparentemente con la suficiente agudeza las alineaciones respectivas a nivel de la llamada *Junta Revolucionaria*, integrada (al igual que en Argentina, será conveniente recordarlo más adelante) por los jefes de las tres armas, que ocupan a la vez los ministerios de Guerra, Aeronáutica y Marina.

2) El caso de la IPC y buena parte de sus connotaciones aparecen hasta

el momento como los principales elementos de unidad entre las diversas líneas internas; pero esta disposición al parecer unánime está todavía lejos de ser una definición antimperialista. «*El caso de la IPC es singular y único* —se ha cansado de repetir el general Velasco Alvarado—, y el gobierno revolucionario ampara la inversión extranjera.» Pero el hecho es que ese caso «*singular y único*» deviene por lo menos ambivalente: de una parte resulta lo suficientemente específico y aprehensible al nivel de la ortodoxia jurídica (en tanto explotación literalmente «ilegal» del petróleo) como para servir de vínculo entre corrientes tan diversas y en última instancia hasta contrapuestas en el análisis del fenómeno del subdesarrollo y de su íntima relación con la explotación imperialista; de otra, al obligar a Washington a entrar en el juego como respaldo visible y contundente de aquella «ilegalidad», desnuda los mecanismos coactivos de la acción imperial y arriesga cambiar, aunque sólo sea sentimentalmente, el signo del proceso. Según todos los indicios, el enfrentamiento con Estados Unidos pretextado por el *affaire* IPC se ha convertido así en un nuevo, y más filosófico, factor de unidad para el régimen militar; y si Washington choca así con el Ejército —donde, en forma no sorprendente según la conformación tradicional de las fuerzas armadas sudamericanas, parece concentrarse la mayor fortaleza del ala

«nacionalista-populista»—, las fricciones pueden hacerse igualmente agrias con la Marina y la Aeronáutica, que (también convendrá recordarlo luego) tienen motivos laterales de resentimiento hacia el Departamento de Estado por la controversia en torno al mar territorial y la debatida adquisición de aviones *Mirage*.

3) Hay aún un factor de unidad que, no por tradicional en los experimentos políticos castrenses, es menos desdeñable: el anticomunismo. Pese a los esfuerzos más recientes de sus voceros más o menos oficiosos, Estados Unidos se ha visto privado en este caso de sus más recurrentes espantajos ante las experiencias aun tímidamente nacionalista: fue el nazi-fascismo frente a Perón, Vargas y Villarroel; tras la Segunda Guerra fue el comunismo contra Arbenz e incluso más recientemente (aunque mucho menos convincentemente, hasta para los habituales *yes-men* de la estructura «interamericana») contra Quadros, Goulart y la rebelión constitucionalista dominicana. Mal les cae el sambenito a los militares que hoy ocupan el sillón de Pizarro: pocos días antes del *putsch* de octubre, el más caracterizado representante del sector «gorila», general Ernesto Montagne (hoy Primer Ministro), planteó ante la VIII Conferencia de Ejércitos Americanos, reunido en Río de Janeiro, una de las tesis más caras a los ideólogos norteamericanos de la última década, avalada en este caso por los entusiastas aplausos que el

general William Westmoreland brindó a su colega peruano; pero introdujo una variante conflictiva: «*La explosión demográfica*—dijo Montagne en esa oportunidad—, *el analfabetismo, la desnutrición, el déficit de vivienda, los salarios insuficientes, la agitación estudiantil, la falta de recursos para emprender obras públicas* y la presencia de capitales foráneos, en particular de origen norteamericano, para la explotación de las riquezas nacionales, *son factores comunes que han contribuido a fomentar el desarrollo de la propaganda y subversión comunistas en América Latina*». Por si quedara alguna duda en la mente de los habituales cazadores de brujas, el propio Velasco Alvarado declaraba en enero (antes de que la controversia con la Casa Blanca, donde sólo diez días atrás se había aposentado Richard Nixon, alcanzara sus más ácidos extremos): «*No somos comunistas. El solo hecho de llevar uniforme nos impide serlo. Somos nacionalistas y tenemos dignidad*». Esta definición, a primera vista maniqueísta y quizá pedestre, conduce de hecho a un par de anotaciones que vale la pena tomar en cuenta.

4) «*Tenemos dignidad*», proclama el general Velasco Alvarado, y con esa formulación delata uno de los problemas más peculiares con que ha tropezado Washington en su entredicho con el régimen de Lima. El «*honor militar*», tantas veces invocado por las fuerzas armadas latinoamericanas como mera cortina de humo para la consecución de objetivos menos confesa-

bles, puede encontrar una acepción más legítima al inscribirse en un proceso de cuño así sea parcialmente «nacionalista». La agresión, e incluso la amenaza, contribuyen en ese contexto a reforzar el sentimiento mesiánico de las fuerzas armadas, que encuentran una forma al parecer incontrovertible de autojustificación al tomar bajo su responsabilidad la defensa de la dignidad nacional. Más habituado a la obsecuencia de los «hombres de paja» de la plutocracia internacional y a la voracidad canallesca de los cuerpos pretorianos centroamericanos, el imperio avanza torpemente en el resbaladizo terreno de estas abstracciones. El trasfondo europeo, teñido del idealismo demoliberal de los imperios decimonónicos convertidos a un nacionalismo nostálgico y grandilocuente, se transparenta en esta soberbia difícil de abatir con el pragmatismo de las negociaciones políticas: para el régimen peruano, transigir en el litigio con la IPC constituiría una afrenta al «honor militar», y esta concepción parece tener más fuerza y arraigo que toda formulación ideológica y aun geopolítica. Abstracta y delicuescente como es, no deja de constituir un factor de unidad y un galvanizador de resistencias.

5) Anticomunista, sí; pero esta caracterización (vale la pena anotar, incidentalmente, que su formulación es en este caso por lo menos cautelosa: los militares peruanos ya no dicen lisa y llanamente «somos anticomunistas», sino que se limitan a precisar

«no somos comunistas») se emparenta menos, al parecer, con la habitual profesión de fe «occidental y cristiana» que con la visceral resistencia que el internacionalismo marxista-leninista ha despertado siempre en los ultranacionalistas. Conviene recordar que en plena guerra mundial, cuando la participación de la Unión Soviética en la lucha de los Aliados contra el nazi-fascismo daba patente de «buenos» a los partidos comunistas latinoamericanos, las logias militares nacionalistas (el GOU en Argentina, la RADEPA en Bolivia) identificaban a éstos con los intereses de «la reacción internacional»; para los PC, a su vez, el peronismo y el MNR fueron movimientos «fascistas», cuyo «nacionalismo-populista» no fue nunca entendido en sus posibilidades de movilización de masas con un criterio antimperialista. No es un azar, empero, que cuando el general Velasco Alvarado opone el concepto «nacionalismo» (y, por supuesto, el hecho de vestir uniforme como expresión más firme y evidente de su plena asunción) a la ideología comunista, el PC peruano esté decididamente alineado en el apoyo a algunas medidas de la junta militar y los países del área socialista entablen con ella relaciones diplomáticas y comerciales singularmente beneficiosas para el régimen peruano (incluyendo, por ejemplo, convenios de intercambio sobre la base de libre convertibilidad monetaria, en lugar de la «moneda convenio» habitual en las transacciones intersocialistas). Resulta

taría impropio en este trabajo un análisis detallado de las condiciones que han hecho posible esta convergencia —y que son, por otra parte, de fácil deducción para un observador atento de la escena internacional—; importa en cambio subrayar el hecho, no sólo como una peculiaridad más del caso peruano, sino también y especialmente como un elemento de aguda incidencia en el desarrollo de un proceso cuyas instancias aparecen aún abiertas.

6) Esa incidencia potencial ha sido uno de los elementos (ciertamente no el único) que contaron en las evaluaciones de Washington al decidir la momentánea suspensión de la Enmienda Hickenlooper. Algunos de los restantes factores ya han sido anotados por los más perspicaces observadores: las dificultades extracontinentales que debe afrontar Estados Unidos, el temor de radicalizar el apoyo interno y hemisférico a la junta militar en tanto no ha podido aún apuntalarse suficientemente una quinta columna capaz de roer las bases del régimen, eventualmente la repercusión de un corte de la cuota peruana en el mercado azucarero norteamericano y la nueva regimentación internacional del producto, quizá la pugna interna de los grandes consorcios cuyos intereses podrían verse afectados por una réplica de los militares. En todo caso, la decisión de Washington ha estado claramente presidida por la lógica del chantajista: es la amenaza del daño, y no su

concreción, lo que permite obtener beneficios. Así, el gobierno de Nixon ha dejado los pronunciamientos «duros» y la latente amenaza de agresión en manos de los parlamentarios ultramontanos, procurando entre tanto aparecer «razonable» y «abierto» a una posibilidad de negociación. Cabe reconocer que el aparato imperial, cuyo instinto de conservación suele ser más afinado que sus procesos mentales, se ha desempeñado más hábilmente que en otras oportunidades; pero conviene anotar, también, que su frenazo constituye un signo de debilidad, aunque esa debilidad sea ciertamente transitoria.

7) Para prever las próximas jugadas, conviene volver sobre el cuadro interno del régimen militar. En el curso de estos seis meses, el proceso ha incluido:

—Velasco Alvarado, considerado como la cabeza visible del sector «nacionalista-populista», capeó con éxito el primer cuestionamiento a su liderazgo, apenas un par de meses después de producido el *putsch*. En esa fecha correspondía hacer efectivo su pase a retiro, y tanto interna como externamente se especulaba en torno a la eventualidad de que eso implicara su sustitución como presidente; pero un pronunciamiento expreso de la junta integrada por los ministros de las tres armas ratificó a Velasco en el cargo. Desde cierto punto de vista, ese pronunciamiento pareció avalar la preeminencia del sector «nacionalista-populista» en el seno

172 de la junta, así como una consolidación de la unidad (hasta entonces algo dudosa) de las tres armas. Las interrogantes irán surgiendo a medida que se componga el *puzzle* consiguiente.

—Algunas semanas después, la destitución de los generales Valdivia y Maldonado, ministros de Hacienda y Fomento respectivamente, apareció como un significativo golpe contra el sector «desarrollista» o «nacionalista de derecha». La razón invocada fue la negligencia de ambos en sus respectivas carteras, al no impedir una evasión de divisas por parte de la IPC, posteriormente a la expropiación; sin ser un pretexto, ese argumento parecía conllevar de hecho un cuestionamiento político, impresión que podría ser ratificada con la inclusión de ambos nombres en un proceso judicial iniciado contra varias figuras complicadas en diversas irregularidades fiscales que beneficiaron a la IPC. Algunos observadores se afirmarían en su interpretación de la destitución como una jugada política al rastrear, entre oficiosas filtraciones, la convicción de que Washington veía en Valdivia (y no con desagrado, al parecer) el más probable sucesor de Velasco Alvarado ante el pase a retiro de éste. (Quizá no esté de más recordar que el mismo expediente del retiro pretexto en 1963 la sustitución por el general Nicolás Lindley del también general Ricardo Pérez Godoy, a quien algunos observadores recuerdan hoy como «progresista», al fren-

te de la junta militar que finalmente abriría el camino del poder a Belaúnde.)

El nombramiento del general (coronel en el momento del golpe) Jorge Fernández Maldonado como ministro de Fomento —más tarde de Minas y Energía, según la reordenación ministerial realizada por la junta; con uno u otro nombre, lo que importa es que el sector petrolero depende de esa cartera— fue interpretado como un nuevo avance de los «nacionalistas-populistas». Los movimientos (viaje y consecuente acuerdo con PEMEX, empresa estatal mexicana que administra el petróleo nacionalizado en 1938 por el gobierno de Lázaro Cárdenas) y declaraciones posteriores (planteando el problema del petróleo en forma global, y anunciando que el régimen peruano no otorgará más concesiones en este campo, sino sólo contratos de exploración y explotación) han parecido dar respaldo a esa interpretación.

—Al anunciarse por Washington la suspensión (término que corresponde en este caso entender en su acepción más literal de quedar en suspenso) de la Enmienda Hickenlooper, el general Velasco Alvarado se entrevistó con dirigentes políticos de diversos partidos —con la significativa excepción del APRA y el PC, amén del ala belaundista de AP—, en lo que fue entendido como un movimiento destinado a dotar a su régimen de un respaldo político a escala nacional. El gobierno perua-

no reclamó asimismo por una eventual aplicación encubierta de represalias económicas, en la forma de negativas crediticias a nivel de organismos financieros teóricamente multinacionales, obteniendo del BID el compromiso de otorgar efectivamente un préstamo técnicamente acordado varios meses atrás. En la inauguración de la conferencia de CEPAL que se desarrolla en Lima en momentos de escribir estas líneas Velasco Alvarado procuró dejar en claro, con cierto dramatismo, que el peligro no había pasado: *«Nosotros continuaremos batallando, seguros de nuestra razón que es de justicia, seguros del respaldo de nuestro pueblo que al fin ha visto restaurada su fe y recuperado su sentido de dignidad nacional»* (...) *«Estamos librando una lucha no sólo por el Perú sino por toda América Latina, cuyo destino histórico hoy vuelve a jugarse en suelo del Perú, como se hizo ayer en los días aurales de nuestra vida republicana. Por eso, por tener nuestra lucha un sentido y una misión latinoamericana es que hoy, aquí, demandamos el respaldo y solidaridad de América Latina, convencidos de que ser solidarios significa mucho más que decirlo»*.

Al menos en los tres días siguientes, el único pronunciamiento decidido ante esta demanda había sido el de Cuba, por boca de Carlos Rafael Rodríguez: *«Sin la complicidad latinoamericana en el ataque a Cuba, la enmienda Hickenlooper no habría surgido jamás. Pese a ello, queremos*

declarar desde esta tribuna de CEPAL que frente a las presiones y chantajes de los Estados Unidos contra Perú y en la lucha del pueblo peruano por su dignidad, su riqueza y su soberanía, la Cuba revolucionaria está a su lado».

—Algunas interrogantes: Si la destitución de Valdivia y Maldonado implicó realmente una defenestración del sector *«desarrollista»*, ¿la ratificación de Velasco Alvarado por el Comando Conjunto no puede verse retrospectivamente como un pacto entre el ala *«nacionalista-populista»* y el sector *«gorila»*? ¿O al menos como la evidencia de que Velasco Alvarado es una figura potable para estos últimos? ¿O Velasco Alvarado ha sido mantenido en cambio como un factor unificador, al estilo de Onganía en la Argentina? ¿Su ratificación podría implicar entonces la concesión de un poder discrecional que le permitiera eventualmente, como al mismo Onganía, relevar a los integrantes de la junta en los que presuntamente descansa el poder, y recomponer ésta según los intereses de los sectores dominantes, dentro de las fuerzas armadas? ¿Hasta dónde o hasta cuándo éstas están dispuestas a acompañar un proceso *«nacionalista-populista»*?

El grado de candor que puso en juego el *Washington Post* es por lo menos dudoso, pero el caso es que su ya célebre advertencia sobre la posibilidad de que la CIA planeara poner en práctica en Perú una *«solución irania»* no hizo más que rati-

ficar el pensamiento latente de la mayoría de los observadores latinoamericanos. En rigor, esa parece ser la única salida posible para Estados Unidos si la junta peruana continúa, como hasta ahora, intransigente en torno al caso IPC; a este juego se ha mostrado dispuesto el APRA, y particularmente la figura patética de su dirigente Víctor Raúl Haya de la Torre, cuyas apetencias de poder han superado ampliamente y hace ya tiempo al más mínimo recuerdo que pudiera quedarle de sus actitudes antimperialistas, que alguna vez fueran precursoras en el continente. Los militares aparecen como conscientes del peligro y, en la medida que mantengan en alto *«la dignidad nacional»*, no podrán sino apelar al respaldo popular. El grado que finalmente otorguen a esa participación constituirá el signo definitorio del proceso que han desatado.

América Latina ha conocido históricamente experiencias *nacionalistas-populistas* que se parecen a la iniciada por los militares peruanos: Perón, Getulio Vargas, Villarroel, fueron héroes y finalmente víctimas de esos experimentos. Sus respectivos destinos pueden ser una elocuente advertencia para Velasco Alvarado y los suyos: el primero fue derrocado y sobrevive sin gloria su pasado, comiendo *«el amargo caviar del exilio»* (como ironizó alguien recientemente); el segundo se suicidó; el tercero fue colgado de un farol frente al palacio de gobierno en La Paz. Por razones complejas y resis-

tentes a todo intento de síntesis, pero entre las cuales seguramente tuvo particular incidencia, en todos los casos, la debilidad personal, ellos mismos mediatizaron el proceso que habían desatado, abandonando a las masas que inicialmente habían convocado en su apoyo. La historia, pues, prueba acabadamente que el *«nacionalismo-populista»* no alcanza a sostenerse sobre las endebles apoyaturas de un paternalismo de élite. En cada uno de estos casos, hubo un instante decisivo, una suerte de *«punto de no retorno»*, que selló el destino del movimiento, y consecuentemente de su conductor. Identificar ese instante (sin el auxilio de la perspectiva histórica con que ahora, por ejemplo, podemos señalarlo en las experiencias pasadas), y actuar en consecuencia, es la gran prueba que deben superar los militares peruanos.

De hecho, empero, ese instante es todos los instantes: si la llamada *«revolución peruana»* quiere merecer su sustantivo además de su adjetivo, debe recordar el axioma de que toda revolución que se detiene, muere. En su ya citada intervención ante la CEPAL, Carlos Rafael Rodríguez lo ha recordado en estos términos: *«Quienes emprendan la reforma evolutiva de los niveles de ingreso se encontrarán con la resistencia organizada de los sectores sociales privilegiados de la América Latina y de sus protectores militares. Deberán, además, afectar inevitablemente a los inversionistas norteamericanos.»*

Por ello, tendrán que afrontar, más tarde o más temprano, este dilema: o se deciden a realizar las transformaciones por las vías revolucionarias, o sufrirán la misma derrota que todos los procesos reformistas experimentaron en las últimas décadas latinoamericanas».

Si los militares peruanos están dispuestos a seguir ese camino, y si cuentan con la fuerza suficiente para emprenderlo, es la incógnita que resta develar. En esta misma edición, Ramón Collar (cuyo agudo análisis es destacable no sólo por estar libre de los esquemas habituales en los juicios marxistas sobre regímenes militares, sino también y especialmente por haber sido escrito apenas a una semana de producido el *putsch*) plantea atinadamente las dudas, las esperanzas y los caminos que se abren frente a los revolucionarios latinoamericanos en casos como éste. A seis meses vista, la experiencia peruana ofrece un rostro estimulante (la firmeza frente al chantaje norteamericano, en cuanto a la IPC y a las doscientas millas marítimas; la expropiación de tierras de la Cerro de Pasco Corporation con vistas a implantar una presunta reforma agraria; el proyecto de reforma bancaria) y una contracara menos halagüeña (intervención en la Universidad, represión de casi toda manifestación pública —aún las realizadas en apoyo al régimen y en contra de Washington—, disolución de algu-

nas movilizaciones campesinas). El saldo, friamente considerado, parece positivo, aunque pueda estar teñido de complacencia por oposición a la amenaza imperial. Pero el camino de la independencia y la soberanía, el camino que Perú habrá de transitar tarde o temprano junto al resto del continente, sólo será viable (como ya lo anticiparan dos peruanos geniales, José Carlos Mariátegui y César Vallejo) para un movimiento que incluya y represente a las masas.

Al preguntársele qué podría ocurrir si Estados Unidos aplicaba la Enmienda Hickenlooper, el general Velasco Alvarado declaró que cabía la posibilidad de un levantamiento popular que desbordara al propio régimen castrense. Es una afirmación insólita en boca de militares, quienes al menos tácticamente no deberían reconocer la eventualidad de ser superados por la fuerza popular; por cierto puede haber sido apenas una maniobra publicitaria para inquietar a Washington, pero no por eso la frase pierde su valor. Porque, con enmienda o sin ella, si el proceso peruano queda trunco, las masas habrán de reclamar en su momento los frutos de una victoria que los mismos militares le reconocen por anticipado. Y lo harán, según las palabras que Perón dijo pero no cumplió, *«con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes»*. . .

Abril 20/1969.

